

Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño¹

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

JULIO DE 2020

Resumen

En la región del Bajo Cauca, la firma del Acuerdo de Paz, hasta ahora, no ha generado cambios sustanciales, entre otras cosas porque no fue una zona de influencia de las antiguas FARC - EP. En la región del Norte de Antioquia, por el contrario, el desarme y desmovilización de esa guerrilla mejoró inicialmente las condiciones de seguridad, creando altas expectativas entre la comunidad. Sin embargo, esta situación fue cambiando en la medida en que iban incursionando o se consolidaron otros grupos armados ilegales en el territorio, y debido a los pocos avances en la implementación en general y, en particular, en el proceso de reincorporación. Además, hay una fuerte preocupación por la falta de capacidades para atender la alerta sanitaria del COVID-19 y los impactos presupuestales que la atención a este fenómeno pueda traer para la construcción de la paz.

Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

Esta subregión cuenta con 1.947 iniciativas en el pacto regional². El 14 de diciembre de 2018, se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR para la subregión, que incluye municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño. Este Plan recoge las iniciativas comunitarias de los 13 municipios, donde participaron 11.128 personas de la comunidad.

Como potencialidades del territorio, en el PATR se destacó la vocación agrícola y ganadera de la región, en la que sobresalen las actividades económicas relacionadas con los cultivos de cacao, plátano, ñame, yuca y café, así como de ganadería de doble propósito y porcinos; además, es una zona con vocación minera y de explotación de madera.

¹ Este análisis se centra en los municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia que hacen parte del PDET. Esta región incluye los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza.

² Sitio web de la ART, consultado el 9 de julio de 2020

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/culmina_con_xito_primera_sesin_institucional_del_a_o_para_24_municipios_pdet_de_antioquia



Contenido

Estado de la implementación de los Acuerdos.

La situación de las víctimas.

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Capacidades territoriales para afrontar el COVID-19.

De acuerdo con la información del PATR, los municipios de la subregión presentan un alto índice de pobreza multidimensional (actualmente, el IPM en la subregión es de 49,3)³. Las principales deficiencias están relacionadas con la ausencia de alcantarillado, pocas fuentes de agua potable, así como la baja cobertura de energía eléctrica y del servicio de recolección de basuras. Otro problema de la región está asociado a la mortalidad infantil por desnutrición.

Con relación a las Obras PDET, en la subregión se ejecutaron 71 obras, por un valor de \$9.103.686.351. Estas obras comprenden: 15 en Anorí, 15 en Briceño, 10 en Cáceres, 14 en Ituango, 9 en Remedios, 3 en Tarazá y 5 en Valdivia. De estas, 54 son de infraestructura social o comunitaria, 8 son para el mejoramiento de servicios públicos y 9 son de infraestructura vial⁴. A través de las Obras PDET u obras de pequeña infraestructura, el PDET ha presentado algunos avances. Sin embargo, el inicio de obras en algunos municipios, como Tarazá, no se han iniciado por problemas de seguridad.

Cabe señalar igualmente que, entre 2018 y 2019, se aprobaron 126 proyectos en 7 municipios; además de 5 proyectos productivos en sectores agrícola, forestal, de ganadería y pecuario, 2 en obras por impuestos, 3 en OCAD paz y 13 en fortalecimiento institucional. Para 2020 se tiene proyectado ejecutar 62 proyectos con una inversión de \$9.815 millones. También se destaca la realización, a principios de 2020, de la primera sesión institucional en Antioquia en la que participaron 14 alcaldes de los municipios de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño. Los mandatarios y sus equipos hicieron parte de 8 mesas, una por cada pilar, en las que se lograron un total de 28 acuerdos.

b) La reincorporación

Según los datos de la ARN, a 31 de mayo de 2020, en el departamento de Antioquia se encontraban 1.346 personas en proceso de reincorporación, siendo el departamento con mayor número de excombatientes. En la subregión Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño hay 3 Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación - ETCR: La Plancha, en el municipio de Anorí, en el que habitan 76 excombatientes; Carrizal, en Remedios, en el que habitan 73 reincorporados, y Santa Lucía, en el municipio de Ituango, en el que se encuentran 85 excombatientes, los cuales están en proceso de reubicación por problemas de seguridad. En el departamento, el Consejo Nacional de Reincorporación - CNR reporta 9 Nuevas Áreas de Reincorporación - NAR: 1 urbana en Medellín, y 8 rurales; sin embargo, ninguna de estas se encuentra en la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.

³ Datos Hogares PDET: Censo Nacional 2018 – DANE. Datos Hogares Nacional: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018 – DANE.

⁴ Sitio web de la ART, consultado el 27 de abril de 2020.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY2NWZlNWYtZDZlMCo0MTc4LTgzMzctODgwNGQzZTJhYjcyliwidCI6IjhmZDEwMTNlTjhmDqtNGMoNy05MzQoLTE2ZTkYOWEYy2E2MSlslmMiOjR9>

Las condiciones de seguridad es uno de los obstáculos más relevantes para el proceso de reincorporación. A 18 de febrero de 2020, en Antioquia, la ARN reporta 22 homicidios a excombatientes y 10 familiares⁵. Además, se registraron 42 amenazas a personas en proceso de reincorporación, de las cuales la mitad han sucedido en municipios del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño⁶. El caso de Ituango merece especial atención por su alto índice de agresiones a excombatientes, donde se reportaron 8 amenazas y 12 homicidios⁷.

De hecho, excombatientes del ETCR Santa Lucía, en Ituango, solicitaron el traslado del Espacio Territorial, debido a las amenazas y la falta de garantías de seguridad. En respuesta, el Gobierno Nacional anunció que se realizará en las próximas semanas el traslado de 74 personas en proceso de reincorporación y 19 de la comunidad, quienes serán reubicados en un sitio concertado con la población del municipio de Mutatá, para que sigan con la ruta de reincorporación⁸.

En relación con los proyectos productivos, según la ARN, en Briceño, Anorí y El Bagre se desarrollan 7 proyectos de reincorporación de carácter individual. Frente a los colectivos, se reportan 3 proyectos (con un valor total de \$ 1.686.249.853) que benefician a 170 excombatientes en los municipios de Anorí e Ituango⁹. Estos proyectos son de ganadería doble propósito, acceso a TIC en población rural y el establecimiento de una granja piscícola¹⁰.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, generó grandes expectativas en la población cultivadora de la región. En el departamento se firmaron 7 acuerdos colectivos que cubren un total de 11.778 familias¹¹. De estas, a corte de diciembre de 2019, el 90,2% recibió al menos un pago por asistencia alimentaria inmediata, el 76,3% de las familias recibieron asistencia técnica integral, el 74,2% contaba con proyectos de seguridad alimentaria en implementación, pero solo 4,87% con proyectos productivos.

El PNIS tiene presencia en cinco municipios de la subregión: Cáceres, Tarazá, Briceño, Ituango y Anorí; mientras que, en otros municipios con altos índices de cultivos donde se firmaron acuerdos colectivos, como Valdivia, no tienen intervención.

⁵ Respuesta de la ARN a Derecho de Petición con radicado OFI20-006565.

⁶ *Ibid.*

⁷ Información obtenida de medios de comunicación. Radio Nacional de Colombia. Excombatientes en Ituango piden acelerar proceso de reubicación, 22 de abril de 2020.

⁸ Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 07 de julio de 2020

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Respuesta a Derecho de petición OFI19-00149333.

Las estructuras ilegales de la región, en algunas zonas permiten la continuidad del programa a cambio de un porcentaje de los recursos obtenidos por las familias. En la zona se habla de una cuota del 10% del pago obtenido por el PNIS. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas¹², llama la atención sobre la vulnerabilidad de campesinos, funcionarios públicos y líderes sociales que promueven el PNIS en municipios como Cáceres y Tarazá, quienes son presionados y amenazados por los grupos armados.

Paralelo al PNIS, en el departamento de Antioquia se implementó el programa "Antioquia libre de coca" el cual tiene un componente de sustitución y otro de erradicación. Este último fue el componente que se priorizó por la anterior gobernación. Cabe advertir que, durante este periodo, no hubo una articulación entre este programa y el PNIS. Con el cambio de administración, se inició un acercamiento entre los dos programas y se busca fortalecer el componente de sustitución.

Según el monitoreo de UNODC, se ha dado una reducción del 9% en la siembra de coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019¹³; si bien es evidente la reducción de los cultivos, "la producción de cocaína se mantiene estable" y los principales territorios en los que hay presencia de cultivos en Antioquia se ubican en el Norte y Bajo Cauca, específicamente en sectores de Valdivia, Tarazá y Cáceres.

En Antioquia, la respuesta del Gobierno ante la situación de los cultivos ilícitos ha sido fortalecer la erradicación forzada, a través de 48 Grupos de Erradicación Manual¹⁴. Al respecto, llama la atención la disparidad en las cifras de erradicación, pues se reportan más hectáreas erradicadas que sembradas. En 2018, por ejemplo, en Bajo Cauca, que es la zona donde mayor discrepancia, se observan municipios como Nechí, donde SIMCI reportó la presencia de 708 ha, aparecen registros de 3.483 ha erradicadas en 2019. Por el contrario, en Tarazá se tiene registro de 3.728 ha erradicadas en 2019, mientras que, según los datos del Observatorio de Drogas del ministerio de Justicia, fueron 7.242 ha¹⁵.

Este proceso avanza en medio de un complejo contexto de seguridad y social derivado de la siembra y resiembra de minas antipersonales, por parte de los diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona para cercar los cultivos e impedir su erradicación, y de la negativa de algunos campesinos coccaleros, quienes se han movilizado en contra de la erradicación, generado tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública en municipios como Tarazá, Valdivia y algunas zonas rurales de El Bagre.

Si bien existen problemáticas asociadas a la complejidad del territorio y, en la actualidad, a las dificultades que supone una pandemia, algunos de los habitantes manifiestan que

¹² Alertas Tempranas N° 009-18, N° 028-18, y N° 020-19

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime. 06 de julio de 2020. <https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2019.html>

¹⁴ Ministerio de Defensa Nacional (27 de diciembre de 2019). Derecho de petición N° 116318 MDN-DMSG-GAL-22. Bogotá.

¹⁵ En esta región fueron reportadas 12.374 hectáreas de coca en 2018; sin embargo, la Fuerza Pública reportó 13.687 hectáreas erradicadas, es decir, 1.312 hectáreas más. A esto se suma que en 2019 han sido reportadas más de 15 mil hectáreas erradicadas en la región.

la falta de éxito en la sustitución de los cultivos se debe a la poca celeridad por parte del Gobierno para la implementación de los proyectos y la disposición para la contratación de los recolectores, como se evidenció en la manifestación virtual realizada por varios campesinos de la zona a través de las redes sociales el pasado 24 de junio de 2020¹⁶.

d) Garantías de Seguridad

El inicio y desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz en la región ha avanzado en medio de un contexto de riesgo para las comunidades en el territorio, debido a la persistencia de la violencia. Según las cifras de la Policía Nacional, en la subregión Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, en 2018, la tasa de homicidio tuvo un incremento del 172% respecto al año anterior, al pasar de 55,34 a 150,73 personas por cada 100.000 habitantes. Para 2019, aunque en la tasa de homicidios disminuyó un 9,6%, (llegando a 136,2), dicha cifra está aún muy por encima de la tasa de 2017. Los homicidios reportados en Bajo Cauca a mayo de 2020 corresponden a 113, en contraste con los 152 presentados a mayo de 2019, según balance presentado por la Gobernación de Antioquia¹⁷.

Esta dinámica de violencia recurrente ha tenido especial impacto sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región. Según la organización Somos Defensores, en lo que va corrido del año, 4 líderes han sido asesinados, algunos presuntamente por grupos paramilitares: Wilmar Alexander Sampedro y Carlos Andrés Chavarría, líderes de la Junta de Acción Comunal – JAC de la vereda Guaimaro, en Tarazá; Jaime José Vanegas, líder campesino del PNIS, y William Ramiro Montoya, vicepresidente de la JAC de Puerto Antioquia, también en Tarazá¹⁸. Con relación a la población excombatiente, cabe señalar que Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con más casos de homicidios (cerca de 28), siendo el municipio de Ituango uno de los más afectados (11), seguido por El Bagre, Cáceres y Remedios.

A lo anterior, se suma la preocupación que se vive en la región por cuenta del incremento del reclutamiento forzado de menores por parte del Clan del Golfo, los Caparros, el ELN y las disidencias de las antiguas FARC - EP, especialmente en los cascos urbanos¹⁹.

La principal estrategia desplegada por el Gobierno Nacional, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y las diferentes administraciones municipales, para disminuir el accionar violento de los grupos armados ilegales, correspondió al aumento del pie de fuerza; no obstante, la situación de seguridad no ha mejorado, pues siguen presentándose múltiples homicidios y, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la intensificación de la violencia en el territorio tiene un fuerte impacto humanitario en la

¹⁶ Agencia de prensa IPC. 25 de junio de 2020.

<https://www.facebook.com/414021415317812/posts/2976542809065647/?sfnsn=scwspmo&extid=YpHMOk8XoJWWLEYq&d=n&vh=e>

¹⁷ Valentina Herrera Blue Radio. 04 de junio de 2020. <https://www.bluradio.com/judicial/en-cuarentena-bajaron-los-homicidios-en-el-bajo-cauca-pero-aumentaron-en-el-suroeste-antq-253986-ie6569929>

¹⁸ Somos Defensores. Boletín trimestral. Sistema de información de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

¹⁹ Información obtenida de medios de comunicación. Revista Semana. El drama del reclutamiento de menores.

14 de marzo de 2020.

mayoría de municipios de la subregión²⁰. Los eventos que más afectan a la población son los homicidios selectivos, los enfrentamientos entre grupos armados, los desplazamientos masivos o restricciones a la movilidad de la población, las amenazas y la utilización de métodos para causar terror, como la tortura. Además, la extorsión es un fenómeno generalizado en la región.

Respecto al fenómeno de desplazamiento, al igual que otros de los hechos asociados a la violencia, se incrementó drásticamente en 2018 y se redujo en 2019. De acuerdo con la Base de datos de acciones del Conflicto de la FIP, en 2018, se registraron 27 eventos de desplazamiento. Además de lo anterior, también llama la atención que dicho incremento obedece, sobre todo, a un aumento en los eventos de desplazamiento masivo, que pasaron de 1 en 2017, a 14 en 2018.

La situación de las víctimas

Según la Unidad para las Víctimas, a corte de marzo de 2020, en la región hay 151.274 víctimas, de las cuales 131.659 son sujetos de atención. Los hechos victimizantes más comunes son el desplazamiento forzado, seguido del homicidio, amenaza y desaparición forzada.

Según cifras de la UARIV, respecto a los procesos de reparación integral, 12.478 personas han sido indemnizadas con la reparación individual, lo que equivale solo al 9.4% de la población sujeta de atención. De estas personas, 881 han participado en procesos de acompañamiento a la indemnización. También, se están implementando 4 planes de reparación colectiva.

En relación con la atención psicosocial, en la región, al menos, 1.590 personas han participado de procesos de atención psicosocial; por otro lado, se ha implementado un Plan de Retorno, y tres actividades de medidas de satisfacción.

Sin embargo, hay una preocupación por el aumento de víctimas en el reciente escenario de disputa entre actores armados, donde se presentan constantemente hechos revictimizantes y nuevas victimizaciones. En ese sentido, se advierte sobre la necesidad de implementar acciones de atención y reparación de las víctimas de los recientes hechos de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado, amenazas, delitos sexuales, entre otras afectaciones.

Asimismo, hay una preocupación sobre la atención psicosocial y reconstrucción de tejidos comunitarios en este contexto de crisis humanitaria, sobre todo por las consecuencias del desplazamiento y las agresiones a líderes sociales.

²⁰ Alertas Tempranas N° 029-18, N°031-18, N° 028-18, N° 020-19, N° 009-18, N° 003-19, N°004-20, y N°002-19 de la Defensoría del Pueblo, para 8 de los 13 municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño. Estas incluyen a los municipios de Ituango, Briceño, Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y Valdivia.

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Desde finales de 2017 hasta 2019, se intensificó un escenario de disputa por rutas del narcotráfico y control territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC y un sector disidente de este grupo llamado "Los Caparros", que se concentró en el Bajo Cauca. Para 2020, por el debilitamiento de "Los Caparros", por las acciones de la Fuerza Pública, esta disputa disminuyó su intensidad. En los municipios del Norte, en 2018, se consolidan las disidencias de los antiguos Frentes 18 y 36 de las FARC y se inicia una fuerte disputa con las AGC en los municipios de Briceño e Ituango, la cual continúa. En el Nordeste Antioqueño, municipios de Segovia y Remedios, se presenta una expansión del ELN y las AGC que hasta el momento no muestra señales de una disputa activa entre estos actores.

La Fuerza Pública, en esta región viene adelantando dos campañas militares en contra de las estructuras criminales y economías ilegales: Operación Agamenón II y Operación Aquiles. Estas acciones han logrado generar importantes golpes y capturas a las diferentes estructuras ilegales, lo que las ha debilitado. No obstante, siguen operando y la violencia continúa.

Capacidades territoriales para enfrentar el COVID-19

A 12 de julio de 2020, en la Subregión Bajo Cauca, Norte, y Nordeste Antioqueño, se presentan 915 casos confirmados de COVID-19, de los cuales se han recuperado el 41,9% y ha fallecido el 0,6%. De estos, 4 casos se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos. La situación más alarmante se presenta en los municipios de Caucaasia y Nechí, que a la fecha presentan más de 40 casos confirmados, en cada municipio, poniendo en dificultades el sistema de atención en salud.

La Subregión del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño solo cuenta con 10 camas UCI disponibles, lo cual es muestra de la precariedad del sistema de salud en la región. Por ejemplo, el Hospital César Uribe Piedrahita, del municipio de Caucaasia, no cuenta con UCI; allí solo hay ambulancias con respiradores para trasladar a los pacientes. Este es el mismo caso de municipios como El Bagre, Tarazá, Cáceres y Nechí, en los que hay hospitales de primer nivel que no cuentan con el equipamiento necesario para tratar casos de insuficiencia respiratoria, por lo cual deben remitir sus pacientes a hospitales de niveles 2 o 3. En Zaragoza, por ejemplo, algunas personas informan que, a pesar de los intentos de la Alcaldía por dotar el hospital, este no tiene los insumos necesarios para atender personas contagiadas por el virus²¹.

²¹ Mi región 360. 21 de marzo de 2020. ¿Cuántos respiradores hay en el Bajo Cauca? <https://miregion360.com/cuantos-respiradores-hay-en-el-bajo-cauca> . Recuperado el 9 de junio de 2019.



El Ministerio de Salud y Protección Social, manifiesta que los municipios que componen esta región, en promedio, tienen 2,45 camas UCI por cada 100.000 habitantes²², y una IPS por cada 12.363 personas y el 92,3% de los municipios de la subregión no tiene ambulancias medicalizadas. Además, según datos del DANE, el 5,9% de los hogares tiene privación por barreras en salud y el 14,1% no tiene seguro de salud.

Adicionalmente, las capacidades de la subregión para enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la cuarentena también son bajas. De acuerdo con el DANE, el 93,6% de los hogares no tienen un empleo formal y el 20,5% viven en condiciones de hacinamiento crítico, lo cual dificulta el cumplimiento de medida de aislamiento preventivo. Además, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, solo el 7,4% de la población está suscrita a internet fijo, lo cual dificulta el acceso a la educación durante la cuarentena.

²² A nivel nacional, hay 11 camas UCI por cada 100.000 habitantes, y en Antioquia, hay 1.